

REPUBLICA DE COLOMBIA



SALA LABORAL  
Acta No. 184

PROCESO	Ordinario laboral
DEMANDANTE	Luz Adriana Lopera Orozco
DEMANDADAS	Colpensiones y Protección S.A.
RADICACIÓN	05001310501520210058001
TEMA	Ineficacia de traslado de régimen
DECISIÓN	Confirma y adiciona sentencia

Medellín, veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

SENTENCIA

Procede la **SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, con ponencia de la magistrada ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ, a resolver el recurso de apelación interpuesto por COLPENSIONES, así como el grado jurisdiccional de consulta en favor de esta entidad, respecto de la sentencia proferida el 24 de febrero de 2023 por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín.

ANTECEDENTES

DEMANDA

LUZ ADRIANA LOPERA OROZCO solicitó que se DECLARE la ineficacia del traslado del RPM al RAIS administrado por PROTECCIÓN S.A. Como consecuencia, se ORDENE a (i) COLPENSIONES reincorporarla sin solución de continuidad al RPM; (ii) PROTECCIÓN S.A. devolver a COLPENSIONES todos los valores que haya recibido por razón de la afiliación, como cotizaciones, sumas adicionales de las aseguradoras, lo descotado para el fondo de garantía de pensión mínima, incluidos

todos los frutos e intereses y rendimientos generados; (vi) COLPENSIONES recibir las devoluciones a efectuarse por PROTECCIÓN S.A., entender la vinculación sin solución de continuidad desde el 1o. de julio de 1999, considerar todos los valores recibidos como semanas efectivamente cotizadas y tenerlas en cuenta para los efectos pensionales del RPM. Una vez se DECLARE la ineficacia, pide que se CONCEDA la pensión de vejez, en el evento que durante el trámite del proceso haya cumplido 57 años de edad. Pidió CONDENAR a PROTECCIÓN al pago de los intereses moratorios y de forma subsidiaria la indexación que se cause entre la fecha de disfrute de la prestación y el momento en que realmente asuma el pago COLPENSIONES, a modo de perjuicios.

## **HECHOS**

Como fundamento de sus pretensiones indicó que nació el 20 de enero de 1969 y tiene 52 años. Comenzó a cotizar al sistema de seguridad social en agosto de 1980 y el 1o. de julio de 1999 fue visitada por un asesor de PROTECCIÓN S.A. quien le señaló lo indispensable de trasladarse del RPM al RAIS pues el ISS iba a desaparecer, así como los aportes realizados. También le dijo que podría pensionarse en el nuevo régimen con menos semanas y una mesada superior, que los herederos recibirían todos los aportes ahorrados en la AFP sin que fueran dependientes del afiliado, que las cotizaciones estarían seguras y tendrían rendimientos que mejorarían una prestación pensional. Agregó que la AFP nunca le comunicó que el traslado de fondo de pensiones traía consecuencias negativas en el monto de su pensión, no le explicó los requisitos mínimos necesarios para pensionarse, los riesgos que corrían los aportes, que debía acumular un capital, modalidades pensionales, etc. Presentó reclamación ante PROTECCIÓN y COLPENSIONES para lograr el traslado de régimen, pero obtuvo respuesta negativa.

## **CONTESTACIONES**

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, aceptó las fechas de nacimiento de la demandante y de inicio de cotizaciones al sistema de seguridad social. Se opuso a las pretensiones y planteó las excepciones de fondo que denominó: improcedencia de declarar ineficaz o nula la afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, prevalencia de la autonomía de la voluntad privada, inoponibilidad de la responsabilidad de la AFP ante Colpensiones, en casos de ineficacia de traslado de régimen, devolución de cuotas de administración, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar intereses de mora e indexación, prescripción, imposibilidad de condena en costas, buena fe y la genérica.

La ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A. también se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Aceptó los hechos relativos a la edad de la demandante y la solicitud efectuada. Como excepciones de mérito propuso las de inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, buena fe, prescripción, aprovechamiento indebido de los recursos públicos y del sistema general de pensiones, reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declarara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe, innominada o genérica.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

El 24 de febrero de 2023, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín DECLARÓ la ineficacia del traslado de la demandante del RPM al RAIS en la AFP PROTECCIÓN S.A. CONDENÓ a esta última a trasladar a COLPENSIONES las sumas que se encuentren en la cuenta de ahorro individual, esto es, los aportes más los rendimientos y los descuentos que se hayan realizado por concepto de fondo de pensión de garantía mínima, sin incluir otros conceptos que no fueron solicitados en la demanda. CONDENÓ a COLPENSIONES a recibir las sumas de

dinero que sean trasladadas por PROTECCIÓN S.A. ABSOLVIÓ a COLPENSIONES del reconocimiento y pago de la pensión de vejez y los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. ABSOLVIÓ a PROTECCIÓN S.A. de las pretensiones referentes al reconocimiento de perjuicios -intereses moratorios e indexación-, y las sumas adicionadas de las aseguradoras. DECLARÓ no probada la excepción de prescripción y que las demás quedaron implícitamente resueltas. DISPUSO que las costas deberán ser asumidas exclusivamente por PROTECCIÓN S.A. y fijó las agencias en derecho en \$1.160.000.

Como argumento de su decisión, señaló que la carga probatoria en asuntos como el presente recae en las AFP y no en los afiliados, tal como lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia. Además, según precedentes recientes, las administradoras de fondos de pensiones deben brindar una orientación acerca de las implicaciones del traslado con independencia de la fecha en que se haya celebrado la afiliación. Como esto no se cumplió, procedía la ineficacia reclamada.

## **RECURSO DE APELACIÓN**

COLPENSIONES solicita que se revoque la decisión, en el entendido que no se puede predicar la nulidad del acto pues la demandante es una persona plenamente capaz, por lo que la decisión de afiliación fue libre y voluntaria, no existe un vicio en el consentimiento. Respecto de la obligación de aceptar a la afiliada en el RPM debe considerarse que, al declararse la ineficacia, se están cargando consecuencias finales a la entidad respecto de situaciones ajenas a su responsabilidad, puesto que en dicho acto sólo participaron la demandante y las administradoras del RAIS. Así las cosas, recibirla en el RPM, sin solución de continuidad, corresponde a una condena que vulnera el sistema de libre competencia entre los dos regímenes pues dicho acto desprotege la garantía constitucional del principio de sostenibilidad financiera del sistema general de pensiones en especial el del RPM.

## **ACTUACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA**

Surtido el trámite consagrado en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, COLPENSIONES reiteró que la sentencia de primera instancia debe ser revocada. Trajo a colación una sentencia decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, conforme a la cual debe demostrarse, de manera contundente, que la AFP incumplió sus obligaciones en la etapa precontractual, es decir, que no brindó una información adecuada, completa y veraz para poder aplicar lo estipulado en el artículo 1604 del Código Civil, pues la presunción establecida no es el cumplimiento de la obligación, sino la culpa en tal incumplimiento. Señaló que en autos es claro que la actora suscribió el formulario de vinculación al RAIS con la AFP y reiteró su voluntad de permanencia, pues sólo hasta el año 2021 manifestó su deseo de regresar al RPM.

En caso de condenar a COLPENSIONES a activar la afiliación del demandante, solicitó que se ordene a los fondos privados trasladar todos los aportes, incluidos los rendimientos, bonos pensionales, seguros provisionales, gastos y cuotas de administración, de acuerdo con las últimas sentencias de la Corte Suprema de Justicia.

### **CONSIDERACIONES**

No fue objeto de controversia que la demandante se trasladó del Régimen de Prima Media –RPM- al de Ahorro Individual con Solidaridad –RAIS- por medio de PROTECCIÓN S.A. (ver formulario en el archivo 12, página 87).

Así las cosas, el Tribunal debe definir si es ineficaz el traslado de régimen pensional de LUZ ADRIANA LOPERA OROZCO a PROTECCIÓN S.A. y consecuentemente, en caso de proceder la declaratoria de la ineficacia, se deberán analizar los conceptos a devolver por el fondo privado. Ello en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación presentado y las demás condenas en el grado jurisdiccional de CONSULTA a favor de COLPENSIONES, como lo dispone el artículo 69 del C.P.T.S.S.

## **ACTO JURÍDICO DE AFILIACIÓN Y PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL EN MATERIA DE TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL**

Para comenzar, la Sala hará un breve recuento de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que estructura el tema.

Inicialmente advirtió la referida Corporación que i) el traslado de régimen debe estar precedido de toda la información relevante para la toma de la decisión; ii) es necesario que el fondo de pensiones proporcione a quien pretenda captar como su afiliado, una información suficiente, completa y clara sobre las reales implicaciones que conllevaría dejar el anterior régimen y sus posibles consecuencias futuras; iii) la figura de la ineficacia es una consecuencia prevista en el literal b del artículo 13 de la ley 100 de 1993 para aquellos casos en que el fondo de pensiones omitió suministrar información que permitiera la selección de régimen de forma libre y voluntaria, acto indebido de esta que tiene como consecuencia no producir sus efectos propios; y, iv) el Estatuto Financiero de la época, en los artículos 97 y siguientes, consagró que las administradoras debían obrar no solo conforme a la ley, sino soportadas en los principios que orientan la buena fe, por lo que se sanciona la falta de información relevante.

Más adelante, precisó que i) es deber de las administradoras de pensiones brindar información en todas las etapas del proceso de afiliación, desde la antesala hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional; ii) la información debe ser completa y comprensible y debe proporcionarse con prudencia, teniendo obligación de buen consejo, que puede llevar incluso a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica; y, iii) la carga de la prueba de demostrar que se informó de forma detallada, clara y documentada recae en la administradora de fondos de pensiones.

De igual forma, la referida Corporación fijó unos grados de exigencia de la información, según las normas vigentes para la fecha en que se

efectúe el vínculo a las administradoras de pensiones, así: i) desde la fundación de las AFP; ii) desde la expedición de la Ley 1328 de 2009 y el Decreto 2241 de 2010 incorporado en el Decreto 2555 de 2010; y iii), a partir de la vigencia de la Ley 1748 de 2014, del Decreto 2071 de 2015. y en la circular 16 de 2016, la cual entrega instrucciones generales para la remisión de información financiera para efectos de inspección, vigilancia y control.

La determinación por tomar tiene como soporte las sentencias proferidas dentro de los radicados 31314 y 31989 de 2008; 33083 de 2011; 12136 y 46292 de 2014, además de las sentencias SL9519 de 2015, SL19447 y SL17595 de 2017; SL3496 y SL4989 de 2018; SL1421, SL1452, SL1688, SL4360 y SL4426 de 2019; STL 3716, STL4001, STL4084, SL2611, SL2877, SL4811 de 2020, SL1217, SL782 de 2021, y SL445 de 2022.

Ahora, sobre la carga de la prueba es importante recordar la sentencia SL4426-2019, en la cual la Corte expuso los motivos por los cuales las administradoras deben demostrar que suministraron una información clara y transparente, lo que se explica desde la premisa de que el afiliado presenta una afirmación indeterminada *-la de que no recibió información-* y es el fondo a quien corresponde demostrar que cumplió con sus deberes en esa materia; además, la AFP está en una mejor posición de ilustrar, por cuanto debe conservar en sus archivos la documentación que soporta el traslado y, como entidad especializada, cuenta con los conocimientos para que a través de sus asesores haga conocer a los afiliados que pretende captar, los pormenores de sus situaciones pensionales y las consecuencias que trae elegir el régimen ofrecido.

De este modo se concluye que las afirmaciones realizadas por el extremo demandante no fueron desvirtuadas procesalmente por PROTECCIÓN S.A., pues si bien aportó el formulario de traslado a dicha entidad (archivo 12, folio 87), en el cual se hizo constar que la escogencia del régimen de ahorro individual se efectuó de forma "libre, espontánea y sin presiones", tal documento no es prueba suficiente para determinar que efectivamente se brindó una asesoría

completa acerca de cuáles serían los efectos positivos o adversos de trasladarse de un régimen pensional a otro.

.

Debe repetirse que la labor de los asesores de los fondos privados, en la etapa pre-negocial -anterior a la materialización del consentimiento- consistía en brindar una información transparente, completa, detallada y comprensible, pues lo que se revisa es si la administradora de fondos de pensiones que pretendía captar un afiliado cumplió con los imperativos profesionales de información.

En el caso objeto de estudio, tampoco se advierte confesión de la actora pues en el interrogatorio de parte señaló que en 1999 puso un aviso en el periódico para la venta de un carro y fue así como la contactó un asesor de PROTECCIÓN S.A., en primera medida interesado en comprar el carro y posteriormente le ofreció pasarse del ISS a PROTECCIÓN S.A. Agregó que aquel le informó que el ISS se iba a acabar y la idea era obtener una mejor pensión, lo sería viable en PROTECCIÓN S.A.

También es importante advertir que, si bien la mayoría de los precedentes judiciales tenidos en cuenta por esta Sala corresponden a afiliados beneficiarios del régimen de transición, las razones que sustentan la ineficacia del traslado no tienen en cuenta esta circunstancia, pues el hecho determinante es la falta de información al afiliado.

No puede pasarse por alto que la ineficacia es una respuesta jurídica a la transgresión de un deber legal y ello implica que el acto jurídico declarado ineficaz carezca de vida jurídica y, por tanto, no produzca efectos. Al efecto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia SL4360-2019, indicó que *“la sanción impuesta en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993 consagra una ineficacia en sentido estricto, lo que conlleva que la consecuencia allí contenida es la exclusión de todo efecto al traslado”*. Por tal razón no es procedente analizar el caso de autos bajo lo dispuesto en el artículo 2º. de la ley 797 de 2003 el cual



modificó el literal E del artículo 13 de la ley 100 de 1993, en lo que respecta al traslado de régimen cuando a un afiliado le faltan 10 años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.

Como ya se mencionó, el Alto Tribunal fijó unos grados de exigencia de la información, dependiendo de las normas vigentes para la fecha en que se efectúe el vínculo (sentencias SL1688-2019, SL4360-2019 y SL4426-2019). En el caso sometido a estudio, el traslado al RAIS se hizo efectivo el 1o. de julio de 1999 (archivo 12, página 84), lo que se corresponde con el primer momento, por lo que según lo expresado en la sentencia SL1452-2019, la obligación de la administradora privada era la de brindar una información necesaria y transparente.

Sobre dichas obligaciones de las administradoras de pensiones, es bastante categórica la sentencia SL782-2021, en la cual la Corte Suprema de Justicia indicó que se debe declarar la ineficacia cuando quiera que: *"...i) la insuficiencia de la información genere lesiones injustificadas en el derecho pensional del afiliado, impidiéndole su acceso al derecho; ii) no será suficiente la simple suscripción del formulario, sino el cotejo con la información brindada, la cual debe corresponder a la realidad; iii) en los términos del artículo 1604 del Código Civil, corresponde a las Administradoras de Fondo de Pensiones allegar prueba sobre los datos proporcionados a los afiliados, los cuales, de no ser ciertos, tendrán además las sanciones pecuniarias del artículo 271 de Ley 100 de 1993, y en los que debe constar los aspectos positivos y negativos de la vinculación y la incidencia en el derecho pensional."*

Se tiene entonces que PROTECCIÓN S.A. no cumplió con la carga de probar que realizó una asesoría lo suficientemente clara, detallada y concreta en relación con su situación particular y en la etapa previa a la suscripción del formulario de afiliación; por tanto, debe concluirse que es desde allí que el traslado resulta ineficaz, lo que genera como consecuencia que la afiliación válida es la efectuada al régimen de prima media, por lo que se debe **CONFIRMAR** la providencia de primera instancia en tal sentido.

## **EFFECTOS DE LA INEFICACIA Y CONCEPTOS A DEVOLVER POR LOS FONDOS PRIVADOS**

La jurisprudencia ha indicado que, frente a los valores a devolver por los fondos privados, debe darse aplicación al artículo 1746 del Código Civil el cual gobierna las restituciones mutuas en el régimen de nulidades, con la necesaria precisión de que, al tratarse de un tema pensional, el juez del trabajo debe aplicar soluciones que compensen de manera satisfactoria el perjuicio que fue ocasionado a un afiliado por el cambio injusto de régimen pensional. Lo anterior implica que la AFP que dio lugar a ello, siempre y cuando se hayan generado las debidas cotizaciones, traslade a COLPENSIONES: (i) la totalidad del capital ahorrado, (ii) los rendimientos financieros obtenidos y (iii) los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues desde el nacimiento del acto ineficaz, estos recursos debieron ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por COLPENSIONES.

De igual forma, no puede verse afectada la sostenibilidad financiera del régimen de prima media con prestación definida, pues debe garantizarse que COLPENSIONES reciba una suma equivalente a la que correspondería con rendimientos financieros, en caso de que la persona no se hubiese trasladado. Además, es claro que, en la forma como se distribuyen las cotizaciones en el RAIS, parte de ellas se imputaron a gastos de administración, compañías aseguradoras y el Fondo de Garantía de Pensión Mínima sumas que, como se dijo, no pueden ser inferiores al monto total del aporte legal correspondiente en caso de que la actora hubiere permanecido bajo la administración de COLPENSIONES.

Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL3464-2019, señaló que *“La Sala ha adoctrinado que los fondos privados de pensiones deben trasladar a Colpensiones la totalidad del capital ahorrado, junto con los rendimientos financieros. Así mismo, ha dicho que esta declaración obliga a las entidades del régimen de ahorro*

*individual con solidaridad a devolver los gastos de administración y comisiones con cargo a sus propias utilidades, pues estos recursos, desde el nacimiento del acto ineficaz, han debido ingresar al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones".*

Así pues, es necesario dejar claros algunos aspectos en lo referente a los conceptos que deben ser devueltos por las AFP del RAIS cuando se declara la ineficacia. En este sentido la Sala, a partir del precedente jurisprudencial, ha identificado los siguientes conceptos:

1. **Capital ahorrado:** constituye el sustento financiero del pago de la prestación y debe ser trasladado cuando exista movilidad del RAIS al RPM<sup>1</sup>, conforme lo dispuesto en el literal b) del artículo 113 de la Ley 100 de 1993.
2. **Rendimientos:** en igual sentido que el concepto anterior, soportan el pago de la pensión y se trasladan conforme a lo enseñado por el canon 113 ídem; se destaca que su devolución se sustenta en que el mayor valor de la cosa aprovecha al vendedor cuando la restitución se debe al incumplimiento del comprador<sup>2</sup>, como lo enseñó la Corte desde la sentencia con radicación 31989 de 2008.
3. **Gastos de administración**<sup>3</sup>: consagrados en el artículo 20 de la Ley 100 de 1993 y cuyo valor corresponde a 3 puntos de la cotización obrero patronal efectuada, la cual se destina al pago de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes, primas de seguros del Fogafín y los pagos correspondientes a la AFP por su gestión.

---

<sup>1</sup>Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019.

<sup>2</sup>Se debe realizar su devolución conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL 31989, 9 sep. 2008, CSJ SL4964-2018, CSJ SL4989-2018, CSJ SL1421-2019, CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL4360-2019.

<sup>3</sup> Se debe realizar la devolución de estos conceptos indexados conforme lo enseñado en las sentencias CSJ SL-3871-2021, CSJ SL-4062-2021 y CSJ 4063-2021.

En lo referente al traslado de estos conceptos por parte de las administradoras del RAIS a COLPENSIONES, la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral ha encontrado 2 razones fundamentales para soportar esta orden: (i) la declaración de ineficacia implica que las administradoras del RAIS nunca debieron recibir estos beneficios<sup>4</sup>, (ii) la devolución debe ser plena y con efectos retroactivos, porque estos recursos serán utilizados para la financiación de una pensión, aspecto que busca mantener el principio de sostenibilidad financiera del sistema de pensiones<sup>5</sup>.

Finalmente, se recuerda la necesidad de que estos conceptos sean asumidos por la administradora con cargo a su propio patrimonio **y se entreguen debidamente indexados**<sup>6</sup>, a efectos de que el dinero no pierda su capacidad adquisitiva, sin que ello resulte incompatible con la devolución de los rendimientos restituidos, de conformidad con el artículo 1746 del Código Civil.

4. **Aportes al fondo de garantía de pensión mínima:** el pago de estos aportes propio del RAIS, conforme al artículo 20 de la Ley 100 de 1993, no encuentra un equivalente en el RPM motivo por el cual esta Sala ha sostenido que, al declararse la ineficacia, los dineros aportados por el afiliado deben ser devueltos al RPM bajo los lineamientos del artículo 7°. del Decreto 3995 de 2008 compilado en el DUR 1833 de 2016<sup>7</sup>.

De conformidad con lo anterior y como en la sentencia analizada solamente se ordenó la devolución de lo pedido expresamente en el escrito de demanda –cotizaciones, rendimientos y los descuentos

---

<sup>4</sup> Sentencia SL-4360-2019.

<sup>5</sup> Sentencia SL-2877-2020.

<sup>6</sup>En este sentido se pueden leer las sentencias CSJ SL1688-2019, CSJ SL1689-2019, CSJ SL 782-2021, CSJ SL 1187-2021 y CSJ SL 1197-2021.

<sup>7</sup>Respecto de este particular se puede consultar la sentencia SL 2877-2020, providencia en la cual la Corte Suprema de Justicia encontró procedente la devolución de los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, máxime cuando estos recursos los manejan las administradoras de pensiones privadas en una subcuenta separada con el fin de financiar aquellas prestaciones.

realizados para el Fondo de Garantía de Pensión Mínima-, se deberá ordenar el traslado al fondo público, además de lo manifestado por la Juez, de **los gastos de administración, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes** y la **prima de reaseguros de Fogafín**, siempre y cuando dentro del período de afiliación se realizaran estos descuentos, con cargo a los propios recursos de PROTECCIÓN S.A, como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL1688-2019. Dicha postura la comparte la Sala, por lo que se **ADICIONARÁ** el proveído. Adicionalmente, las sumas a trasladar por la AFP deberán ser debidamente **indexadas**.

Ahora, no se pueden pasar por alto las recientes providencias de la Corte Suprema de Justicia como las sentencias SL843, SL755 y SL756 todas de 2022, en las cuales se impone a las AFP privadas la obligación de entregar información en la que aparezcan discriminados los conceptos trasladados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Así pues, para esta Sala es válido que se exija una claridad en los valores y conceptos a devolver, por lo que se **ADICIONARÁ** la condena a para ordenar que, al momento de efectuar el traslado de los diferentes emolumentos a COLPENSIONES, todos los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique.

## **EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN**

La Corte Suprema de Justicia en sentencias SL1688-2019, SL373-2021 y SL4062-2021 ha señalado que la prosperidad de la ineficacia es el resultado del incumplimiento de un elemento estructural del negocio por lo que, al no haber producido efectos, el solo transcurso del tiempo no tiene la virtualidad de integrar los elementos omitidos. Dicha postura

la comparte esta Sala por lo que no está llamada a prosperar la excepción en estudio.

Debe dejarse también en claro que los conceptos a devolver por el fondo privado corresponden a sumas que están llamadas a integrar el capital indispensable para la consolidación y financiación de una posible prestación; en consecuencia, están ligados de manera indisoluble con el estatus de pensionado, aspecto por el cual tampoco pueden estar sometidos a prescripción, tal y como se señaló en la sentencia SL1473-2021 de la Alta Corte.

En los términos expuestos, se **CONFIRMARÁ** y **ADICIONARÁ** la sentencia revisada en apelación y en grado jurisdiccional de consulta.

Las costas procesales de la primera instancia como allí se determinó. En esta instancia a cargo de COLPENSIONES por no haber salido avante el recurso. Las agencias en derecho se fijan en la suma de un SMLMV.

En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

## **RESUELVE**

**PRIMERO: ADICIONAR** el numeral segundo de la sentencia, en el sentido de **ORDENAR** a

- I) PROTECCIÓN S.A.** que traslade a **COLPENSIONES**, además de lo ordenado, **la prima de reaseguros de Fogafín**, siempre y cuando dentro del período de afiliación se hayan realizado estos descuentos, **los gastos de administración** y las **primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivientes** con cargo a sus propios recursos y por el lapso en que el actor permaneció allí. Adicionalmente, todas las sumas objeto de traslado, deberán ser debidamente **indexadas**.

II) **PROTECCIÓN S.A.** que, al momento de cumplir la orden de trasladar las sumas recibidas con motivo de la afiliación de la demandante, los conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en todo lo demás la sentencia.

**TERCERO:** Costas procesales y agencias en derecho, como se dejó dicho en la parte motiva de esta sentencia.

La presente providencia se notifica por edicto.

Los Magistrados,



**ADRIANA CATHERINA MOJICA MUÑOZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ**